



Asamblea General

Distr. general
20 de noviembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 59/2020, relativa a Carlos Ghosn (Japón)* ** ***

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 18 de octubre de 2019 al Gobierno del Japón una comunicación relativa a Carlos Ghosn. El Gobierno respondió a la comunicación el 17 de diciembre de 2019. El Japón es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional,

* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.

** En el anexo figura un voto particular de Sètondji Roland Adjovi (parcialmente disidente).

*** El anexo del presente documento se reproduce únicamente en el idioma en que se presentó.



étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Carlos Ghosn, de 66 años, es ciudadano de Francia, el Líbano y el Brasil. Nació en Porto Velho (Brasil). Durante más de 20 años fue Director General de Renault-Nissan-Mitsubishi, el primer grupo automovilístico de ámbito mundial.

a) Antecedentes

5. Según la fuente, el Sr. Ghosn fue detenido en cuatro ocasiones, cada vez después de que venciera el plazo máximo de 23 días establecido por la legislación japonesa para mantener a una persona en detención policial. De este modo, las autoridades pudieron mantenerlo privado de libertad de forma ininterrumpida.

6. A cada una de las cuatro detenciones le siguió una reclusión de características idénticas que, según la fuente, atentaba contra los derechos y la dignidad del Sr. Ghosn y perseguía el objetivo de obligarlo a confesar. Entre esas condiciones figuraban el régimen de aislamiento, la prohibición de salir de la celda, la privación de ejercicio durante varios días consecutivos, la presencia permanente de luz para perturbarle el sueño y la falta de calefacción.

7. El Sr. Ghosn no compareció ante una autoridad judicial ni pudo impugnar su privación de libertad en ninguno de los períodos de 23 días en los que permaneció en detención policial. Según la fuente, el fiscal sometió al Sr. Ghosn a interrogatorios diarios sin la presencia de su abogado. Dichos interrogatorios tenían lugar varias veces al día, con una duración media de cinco horas, incluso en fines de semana y festivos. La fuente alega que el fiscal intentó que el Sr. Ghosn firmara documentos en japonés que este no entendía amenazándolo con prolongar su reclusión. Además, se denegó al Sr. Ghosn la posibilidad de que lo visitaran sus familiares mientras permanecía en detención policial.

8. La fuente añade que durante el período que pasó en prisión preventiva, que comenzó el 11 de enero de 2019, el Sr. Ghosn pudo recibir visitas de sus familiares, aunque debían permanecer separados de él por una mampara de cristal y siempre en presencia de un guardia que tomaba notas del contenido de sus conversaciones, lo que supuso negarles la posibilidad de charlar de forma confidencial. Según la fuente, durante su privación de libertad el Sr. Ghosn perdió mucho peso, ya que le daban comida muy de vez en cuando y estaba sometido a condiciones de reclusión precarias.

b) Detenciones del Sr. Ghosn

9. El Sr. Ghosn fue detenido por primera vez el 19 de noviembre de 2018, cuando fue interceptado al llegar al aeropuerto de Tokio para ser interrogado. Según la fuente, las autoridades habían informado de la detención a los medios de comunicación. A continuación, el Sr. Ghosn fue recluido en la prisión de Kosuge, en Tokio. El 21 de noviembre se prorrogó su detención policial por diez días, y el 30 de noviembre se volvió a prorrogar por diez días más. El 10 de diciembre, al finalizar el período máximo de 23 días en detención policial, durante el cual había sido interrogado a diario sin la presencia de su abogado y sin que se le permitiera solicitar su puesta en libertad, el Sr. Ghosn compareció por primera vez ante un juez y fue acusado de “ocultar ingresos hipotéticos (primas) a las autoridades fiscales”.

10. El 10 de diciembre de 2018, inmediatamente después de que se formularan cargos contra él, la Fiscalía detuvo al Sr. Ghosn por segunda vez por los mismos delitos, aunque esta vez atribuidos presuntamente al período comprendido entre 2015 y 2017. La fuente sostiene que esta segunda detención, que parece haberse basado en el fraccionamiento de los mismos hechos en varias secuencias, permitió que los fiscales iniciaran un nuevo período de detención policial durante el cual el Sr. Ghosn fue interrogado sin la presencia de su abogado con el fin de que confesara.

11. Según la fuente, las autoridades judiciales habían autorizado a los fiscales a mantener recluido al Sr. Ghosn por un período inicial de diez días. No obstante, el 20 de diciembre de 2018, tras percibir las maniobras procesales que estaba utilizando la Fiscalía, el Tribunal de Tokio, y posteriormente el Tribunal Supremo de Tokio, rechazaron una solicitud para mantener al Sr. Ghosn en detención policial por un nuevo período de diez días. La fuente sostiene que dicha prórroga no era necesaria, ya que el Sr. Ghosn había aceptado llevar una tobillera electrónica y se habían confiscado todos sus pasaportes. Subraya además que, en ese preciso momento, cuando el Sr. Ghosn debía ser puesto en libertad, el fiscal lo detuvo por tercera vez.

12. El 21 de diciembre de 2018, mientras seguía privado de libertad, el Sr. Ghosn fue detenido por tercera vez y puesto en régimen de detención policial por haber hecho presuntamente que Nissan le compensara, durante la crisis financiera de octubre de 2008, “pérdidas en inversiones personales” que habían ascendido a 1.850 millones de yenes (15 millones de euros). La fuente señala que esos hechos, ocurridos diez años atrás, ya habían sido puestos en conocimiento de los fiscales en el pasado, en el marco de una investigación llevada a cabo por la autoridad supervisora del Japón. Sin embargo, en ese momento la Fiscalía no había considerado necesario iniciar un proceso penal.

13. El 23 de diciembre de 2018, la tercera detención policial de que era objeto el Sr. Ghosn se prorrogó por un período inicial de diez días, hasta el 1 de enero de 2019. El 31 de diciembre de 2018 se prorrogó por segunda vez por diez días más, hasta el 11 de enero de 2019. El 8 de enero de 2019, el Sr. Ghosn, de conformidad con el artículo 34 de la Constitución del Japón, compareció brevemente ante un juez para declarar su inocencia y reclamar aclaraciones sobre los motivos de su privación de libertad prolongada. El 11 de enero, el Sr. Ghosn fue acusado de delitos relacionados con los supuestos hechos mencionados en su segunda y tercera detenciones. Ese mismo día presentó una solicitud de libertad bajo fianza, que fue rechazada por el Tribunal de Tokio el 15 de enero. El 18 de enero presentó una nueva solicitud de puesta en libertad, que el mismo Tribunal rechazó el 22 de enero. El 28 de febrero presentó una tercera solicitud de puesta en libertad.

14. El 5 de marzo de 2019, tras haber permanecido 108 días recluido, el Sr. Ghosn fue puesto en libertad bajo fianza. La fuente señala que en las dos órdenes de libertad bajo fianza dictadas ese mismo día se indicaba que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, como había aducido la Fiscalía. A pesar de ello se impusieron al Sr. Ghosn 15 requisitos, entre ellos contar con una cámara de vigilancia en la entrada de su residencia que funcionara las 24 horas del día y presentar todos los meses al tribunal un registro de sus llamadas telefónicas, su historial de búsqueda en Internet y todas sus citas. La fuente afirma que el Sr. Ghosn cumplió escrupulosamente todos esos requisitos, lo que confirmaba que no había ningún riesgo que justificara que se le impusiera prisión preventiva. El Sr. Ghosn estuvo a la entera disposición de los tribunales para ser interrogado, sometido a careos con los testigos y juzgado por las acusaciones que se formulaban contra él.

15. El 3 de abril de 2019 el Sr. Ghosn anunció que el 11 de ese mismo mes celebraría una conferencia de prensa en Tokio. Iba a ser la primera oportunidad de que gozaba para exponer argumentos en su defensa y responder a las acusaciones que se formulaban en su contra. Según la fuente, al día siguiente, 4 de abril, a las 5.50 horas, la Fiscalía decidió detener al Sr. Ghosn por cuarta vez.

16. La fuente afirma que el fiscal acudió acompañado de 20 personas, entre ellas periodistas y fotógrafos, lo que ponía de manifiesto su intención de escenificar la detención presentando al Sr. Ghosn como culpable. Alega que, durante ese incidente, las autoridades agredieron a una familiar del Sr. Ghosn que se encontraba junto a él y que fue tratada como sospechosa, a la que se denegaron las solicitudes para contactar con sus abogados hasta que estos se presentaron aproximadamente a las 9.00 horas para prestarle asistencia. El fiscal quiso interrogarla sin que estuvieran presentes sus abogados y trató de hacerle firmar documentos en japonés, idioma que ella no entiende.

17. La fuente alega que, tras su cuarta detención, el Sr. Ghosn fue nuevamente interrogado durante horas pese a su frágil salud y sin la presencia de su abogado. Se le mostraron documentos en japonés, idioma que no entiende, y no pudo preparar su defensa adecuadamente.

18. El 25 de abril de 2019 el Sr. Ghosn fue puesto en libertad bajo fianza tras permanecer otros 21 días recluso. Habiendo admitido que no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, como aducía el fiscal, los tribunales impusieron al Sr. Ghosn 15 requisitos, que se sumaron al pago de una fianza importante (más de 4 millones de dólares de los Estados Unidos) y a los 9 millones de dólares que ya se habían abonado para su puesta en libertad. Entre las medidas adicionales que se le impusieron figuraban la prohibición de salir del Japón o de viajar dentro del país sin autorización judicial, la obligación de residir en una dirección aprobada por el tribunal, la prohibición de mantener contacto directo con su esposa, la presencia de una cámara de vigilancia en su apartamento que funcionara durante las 24 horas del día, la prohibición de utilizar teléfonos móviles o computadoras que no fueran los proporcionados por sus abogados y la obligación de presentar todos los meses al tribunal un registro de sus llamadas telefónicas, su historial de búsqueda en Internet y todas sus citas.

19. Según la fuente, el número y la magnitud de las restricciones impuestas al Sr. Ghosn en su libertad de circulación y de comunicación con el mundo exterior fueron comparables al arresto domiciliario. Por lo tanto, el Sr. Ghosn estuvo privado de su libertad desde su primera detención, el 19 de noviembre de 2018, hasta el momento en que se presentó esta comunicación al Grupo de Trabajo.

20. Por último, la fuente señala que el 10 y el 21 de mayo de 2019 la defensa interpuso sendos recursos contra las decisiones judiciales, pero estos fueron rechazados sin aportar ninguna razón. La fuente sostiene que, dado que se vulneró repetidamente el derecho del Sr. Ghosn a un juicio imparcial, su privación de libertad fue arbitraria.

c) Análisis de las vulneraciones cometidas

21. La fuente sostiene que se vulneraron los derechos que asisten al Sr. Ghosn en virtud de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto y que su privación de libertad fue arbitraria y se inscribe en la categoría III. En particular, la fuente alega que el Sr. Ghosn fue sometido a una privación de libertad injustificadamente prolongada y en condiciones muy duras. Se vulneraron sus derechos a ser llevado sin demora ante una autoridad judicial y a recurrir su reclusión. Además, su derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable se vio gravemente mermado, no se le permitió disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa ni comunicarse con un abogado de su elección y no se respetó su derecho a la presunción de inocencia.

d) Derecho a impugnar la legalidad de la detención

22. La fuente alega que se impusieron al Sr. Ghosn cuatro períodos de detención policial, lo que constituye una vulneración de la garantía prevista en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, según la cual toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal debe ser llevada sin demora ante un juez u otra autoridad autorizada por la ley para ejercer funciones judiciales. Según estableció el Comité de Derechos Humanos en su observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, toda persona debe comparecer ante un juez o una autoridad judicial en un plazo de 48 horas a partir del momento de su detención. Inicialmente el Sr. Ghosn permaneció privado de libertad durante 23 días, entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2018, tiempo durante el cual no compareció ante ningún juez. Su caso no fue llevado ante los tribunales hasta el 10 de diciembre de 2018, 23 días después de su detención.

23. Esta misma pauta se repitió tres veces. El 10 de diciembre de 2018, el Sr. Ghosn volvió a ser detenido por los mismos delitos, aunque esta vez atribuidos al período comprendido entre 2015 y 2017, y permaneció en detención policial hasta el 20 de diciembre de 2018. Durante este período de privación de libertad no fue llevado ante un juez. El 21 de diciembre fue detenido por tercera vez, y de nuevo permaneció recluso durante 23 días antes de que fuera llevado ante un juez el 11 de enero de 2019 y se formularan acusaciones en su contra. El 4 de abril el Sr. Ghosn fue detenido por cuarta vez y permaneció en detención policial durante 21 días antes de que fuera llevado ante un juez el 25 de abril y se presentaran acusaciones contra él. Según la fuente, este uso de la detención policial forma parte del sistema *daiyo kangoku* y constituye una vulneración flagrante del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. La fuente concluye que el derecho del Sr. Ghosn a ser llevado sin demora ante una autoridad judicial fue vulnerado en cuatro ocasiones.

24. Además, durante varios períodos el Sr. Ghosn no pudo impugnar ante un tribunal su situación jurídica ni la privación de libertad ininterrumpida de que fue objeto, a saber: a) durante los 23 días siguientes a su detención inicial y los 10 siguientes a su segunda detención (pasados los cuales la detención policial no pudo prolongarse por otros 10 días más); b) durante los 23 días siguientes a su tercera detención; y c) durante los 21 días siguientes a su cuarta detención. Estos hechos constituyen una vulneración del artículo 32 de la Constitución del Japón y del artículo 9, párrafo 4, del Pacto, que consagra el principio del *habeas corpus*. El Sr. Ghosn no pudo presentar ninguna solicitud de puesta en libertad hasta que se formularon acusaciones contra él pasados esos períodos. En ese momento presentó dos solicitudes, el 11 y el 18 de enero de 2019, que fueron desestimadas. Para que se cumpliera la garantía establecida en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto, el Sr. Ghosn habría debido disponer de esa posibilidad desde el momento en que fue detenido, y no al cabo de 23 días.

e) Razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la privación de libertad

25. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Ghosn no fue necesaria ni razonable, por lo que vulneró el artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Como aclaró el Comité de Derechos Humanos en su observación general núm. 35, la prisión preventiva por la imputación de un delito debe ser una medida razonable y necesaria en todas las circunstancias y los tribunales deben considerar la posibilidad de aplicar medidas alternativas. En el caso del Sr. Ghosn, los primeros 108 días en que permaneció privado de libertad, es decir, los tres primeros períodos sucesivos de detención policial seguidos de la prisión preventiva que finalizó el 5 de marzo de 2019, y los 21 días consecutivos de detención policial de que fue objeto tras su cuarta detención, no fueron necesarios ni razonables. El Sr. Ghosn había presentado a los jueces garantías de que permanecería a disposición del tribunal, lo que demostraba que no había riesgo de fuga, injerencia en los testigos o destrucción de pruebas. También había dado garantías de que llevaría una tobillera electrónica y contrataría, a sus expensas, a agentes de seguridad para que vigilaran sus movimientos en espera del juicio.

26. La posibilidad de imponer medidas alternativas a la prisión preventiva debería haberse valorado mucho antes del 5 de marzo de 2019, fecha en que el Sr. Ghosn fue puesto en libertad bajo fianza por primera vez. Los tribunales habían reconocido que no había riesgo de fuga, colusión o destrucción de pruebas. No obstante, no ejercieron ningún control efectivo de la detención policial ni de la prisión preventiva de que fue objeto el Sr. Ghosn. La fuente alega que los tribunales aprobaron esas medidas sin realizar un examen exhaustivo, lo que es habitual en un sistema judicial en el que prácticamente todas las peticiones presentadas por los fiscales para que se imponga o se prolongue una medida de privación de libertad son aceptadas por los jueces, en particular cuando los sospechosos no admiten los hechos de que se los acusa.

27. Además, la privación de libertad del Sr. Ghosn no fue razonable porque fue el resultado de los métodos arbitrarios utilizados por la Fiscalía. La fuente sostiene que el fiscal utilizó medios procesales para eludir el plazo máximo de 23 días de detención policial mediante: a) la división artificial del delito de ocultación de ingresos en dos períodos distintos (de 2010 a 2014 y de 2015 a 2017), lo que dio lugar a dos detenciones y permitió la imposición de dos períodos de detención policial de 23 días cada uno; b) la detención del Sr. Ghosn por tercera vez el 21 de diciembre de 2018 por unos hechos ocurridos diez años atrás, que el fiscal ya había examinado con anterioridad y por los que había decidido no incoar actuaciones¹; y c) la detención del Sr. Ghosn por cuarta vez el 4 de abril de 2019 por hechos que la Fiscalía conocía desde hacía mucho tiempo.

28. Según la fuente, los métodos utilizados por los fiscales tienen por objeto ejercer una intensa presión psicológica sobre los sospechosos, reclusos en condiciones muy duras, para obligarlos a confesar. La confesión se presenta como la única vía de que disponen los sospechosos para recuperar su libertad, lo que constituye una vulneración de su derecho a un juicio imparcial.

¹ La fuente alega que la detención del Sr. Ghosn tenía por objetivo mantenerlo recluso pese a la orden de puesta en libertad dictada el 20 de diciembre de 2018.

29. Además, al dictarse su puesta en libertad el 25 de abril de 2019, se impusieron al Sr. Ghosn 15 requisitos con condiciones similares a las de un arresto domiciliario. Dichos requisitos eran desproporcionados, teniendo en cuenta la ausencia de riesgo de fuga y destrucción de pruebas, hecho reconocido por el propio Tribunal de Tokio al imponerle la libertad bajo fianza. La fuente subraya que en la causa se juzgaban delitos de cuello blanco, presuntamente sin uso de violencia. Además, en el período que el Sr. Ghosn ya había pasado anteriormente en libertad provisional, entre el 5 de marzo y el 4 de abril de 2019, este había demostrado que cumplía todos los requisitos que se le habían impuesto.

30. Las nuevas restricciones impuestas al Sr. Ghosn, incluida la prohibición de mantener contacto directo con su esposa sin autorización judicial previa, no estaban fundamentadas mediante argumentaciones de los tribunales ni sujetas a ningún límite de tiempo. Los recursos interpuestos contra esa orden, fundamentadas en el derecho a la privacidad y a la vida familiar, garantizado por el artículo 17 del Pacto y el artículo 91 de la Constitución del Japón, fueron rechazados por el Tribunal de Apelación de Tokio y el Tribunal Supremo del Japón sin fundamentación alguna. Tras la decisión del Tribunal Supremo, el 23 de mayo de 2019 el Sr. Ghosn presentó una solicitud para que se le permitiera reunirse con su esposa durante al menos una hora al día en presencia de sus abogados. El 24 de mayo, el Tribunal de Tokio rechazó la solicitud. Según la fuente, la decisión estaba sujeta a la entera discreción del juez y no admitía recurso.

31. La esposa del Sr. Ghosn siempre había estado a disposición de los fiscales y había sido interrogada sobre los presuntos hechos antes de la puesta en libertad del Sr. Ghosn. No había ningún riesgo de fraude ni de que el Sr. Ghosn la presionara. La fuente sostiene que restringir al Sr. Ghosn el contacto con su esposa, incluso en presencia de sus abogados, constituyó una forma de persecución judicial.

f) Confesión forzada

32. Según la fuente, el Sr. Ghosn permaneció privado de libertad del 19 de noviembre de 2018 al 5 de marzo de 2019, y posteriormente del 4 al 25 de abril de 2019, en condiciones que vulneraban el artículo 10, párrafo 1, del Pacto, que complementa el artículo 9². Desde su detención el 19 de noviembre de 2018, el Sr. Ghosn permaneció en régimen de aislamiento y en unas condiciones que propiciaron, durante su cuarto período de detención policial, que su abogado presentara una solicitud para que la Fiscalía dejara de “torturar” a su cliente. La fuente alega que el régimen de privación de libertad al que fue sometido el Sr. Ghosn tenía por objeto castigarlo por negarse a confesar, y además lo debilitó notablemente y mermó su capacidad para defenderse con eficacia. La fuente sostiene que las condiciones de reclusión pueden ser tenidas en cuenta al determinar el carácter arbitrario de una privación de libertad y que la imposición del régimen de aislamiento puede constituir una vulneración de los artículos 7 y 10 del Pacto. Las condiciones de reclusión a que fue sometido el Sr. Ghosn también contravinieron los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en los que se establece el derecho de la persona privada de libertad a comunicarse con el mundo exterior, en particular con sus familiares y su abogado.

33. La fuente alega que las medidas impuestas al Sr. Ghosn forman parte de una pauta sistemática por la que los sospechosos son privados de libertad durante largos períodos y en condiciones duras con el fin de obligarlos a confesar. El Sr. Ghosn fue puesto en una situación en la que se vio obligado a confesar actos que no había cometido, a riesgo de permanecer privado de libertad durante un período prolongado. En efecto, fue coaccionado con el pretexto de que esa era la única manera de lograr su libertad y fue obligado a firmar documentos en japonés en ausencia de su abogado. En ellos, de los que solo se le proporcionó una traducción simultánea oral, figuraban los hechos relativos a las acusaciones que se formulaban contra él. Esto constituye una vulneración del derecho a no ser obligado a declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable, consagrado en el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto.

² Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 59.

g) Medios y tiempo para preparar la defensa

34. La fuente sostiene que las autoridades vulneraron el derecho del Sr. Ghosn a disponer del tiempo y los medios necesarios para la preparación de su defensa y a comunicarse con un abogado de su elección, como se establece en el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto.

35. En el contexto de los cuatro períodos prolongados en que permaneció en detención policial, que duraron dos meses y medio en total, la Fiscalía sometió al Sr. Ghosn a interrogatorios diarios, en ocasiones varias veces al día, con una duración media de cinco horas, sin la presencia de su abogado. Esto constituyó una grave vulneración de los derechos de defensa y a la igualdad de condiciones. Durante los interrogatorios, los fiscales mostraron al Sr. Ghosn documentos que él no había visto nunca escritos en japonés, idioma que desconoce. Por consiguiente, no había podido hablar sobre esos documentos con su abogado. El Sr. Ghosn firmó documentos en japonés, de los que solo se le había proporcionado una traducción simultánea oral, en los que se describían los hechos relativos a las acusaciones que se formulaban contra él. Lo hizo por considerar que era la única manera de que lo pusieran en libertad.

36. Los fiscales pudieron entrevistar al Sr. Ghosn a cualquier hora del día, incluso por la noche o los domingos y festivos, en horarios en los que sus abogados no podían acceder al centro de detención. Además, el Sr. Ghosn vio gravemente restringido su derecho a comunicarse con sus abogados del 19 de noviembre de 2018 al 11 de enero de 2019, y posteriormente del 5 al 21 de abril de 2019, ya que solo pudo mantener entrevistas con ellos por un máximo de dos horas. Sus abogados no podían acceder al centro de detención durante los fines de semana.

37. Mientras el Sr. Ghosn permaneció recluido en la cárcel de Kosuge, solo se le permitió hablar con sus abogados extranjeros durante un máximo de 30 minutos y sin ninguna confidencialidad, ya que las entrevistas se realizaron en presencia de guardias que tomaban notas de sus conversaciones. La fuente señala el contraste existente entre estas restricciones y las horas de interrogatorio a las que fue sometido el Sr. Ghosn.

38. Además, se denegó al Sr. Ghosn el acceso a los alegatos, por lo que tuvo que reconstruir la investigación de los fiscales a partir de las preguntas que se le formularon durante los interrogatorios. Según la fuente, en el Japón la fase de puesta a disposición de la defensa del material relativo a la investigación realizada por el fiscal dura varios meses y este último no está obligado a dar a conocer el material exculpativo. Esto constituyó una vulneración del derecho del Sr. Ghosn a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa.

h) Presunción de inocencia

39. La fuente sostiene que las autoridades investigadoras vulneraron el derecho del Sr. Ghosn a la presunción de inocencia, garantizado por el artículo 14, párrafo 2, del Pacto. El 19 de noviembre de 2018, cuando fue detenido, el Sr. Ghosn fue presentado como culpable, ya que los medios habían sido informados previamente de su detención. La prensa informó periódicamente de las acusaciones que se formulaban contra él, publicando información que solo los fiscales habían podido presentar durante el proceso, con el fin de hacerle parecer culpable. Además, cuando el Sr. Ghosn compareció ante el Tribunal de Distrito de Tokio el 8 de enero de 2019, estaba esposado y atado a la cintura con una cuerda.

40. Cuando el Sr. Ghosn fue detenido por cuarta vez el 4 de abril de 2019, el fiscal se presentó a las 5.50 horas acompañado de periodistas y fotógrafos, que grabaron imágenes de la detención que luego serían ampliamente difundidas. Esto contribuyó a crear una imagen pública negativa del Sr. Ghosn y a presentarlo como culpable de los hechos que se le imputaban.

Respuesta del Gobierno

41. El 18 de octubre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno del Japón con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicaciones y le pidió que, a más tardar el 17 de diciembre de 2019, le facilitara información detallada sobre la situación del Sr. Ghosn. También le pidió que indicara las disposiciones jurídicas que

justificaban su privación de libertad, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

42. En su respuesta de 17 de diciembre de 2019, el Gobierno señaló que le resultaba difícil proporcionar información concreta sobre el caso del Sr. Ghosn, puesto que se encontraba en espera de juicio. No obstante, el Gobierno subrayó que el Japón, en su calidad de Estado parte en diversos tratados de derechos humanos, incluido el Pacto, había cumplido escrupulosamente las obligaciones que le incumbían en virtud de esos tratados. Los procedimientos penales se basan en las leyes y reglamentos pertinentes, como el Código de Procedimiento Penal, y se siguen los procedimientos adecuados para esclarecer los hechos de cada caso, a la vez que se garantizan los derechos humanos fundamentales. Además, el trato que reciben las personas recluidas en las instituciones penitenciarias en espera de decisión judicial es compatible con el respeto de sus derechos humanos. El Gobierno considera que no hay motivos para considerar que los sistemas o su aplicación vulneraran el Pacto o fueran arbitrarios.

43. El Gobierno se refiere, más concretamente, a la alegación formulada por la fuente de que la detención del Sr. Ghosn y las medidas que se le impusieron tenían por objeto que confesara. En el artículo 38, párrafo 3, de la Constitución del Japón y el artículo 319, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal se establece que el acusado “no podrá ser condenado si la única prueba incriminatoria es una confesión”. Por consiguiente, los fiscales nunca se basan exclusivamente en confesiones, ni siquiera en los casos en que no se discuten los hechos. En el Japón, los fiscales solo inician actuaciones penales cuando consideran que hay una probabilidad elevada de que se dicte una sentencia condenatoria sobre la base de pruebas legítimas y tras haber reunido información objetiva suficiente. Además, según el artículo 38, párrafo 2, de la Constitución del Japón y el artículo 319, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal, las confesiones obtenidas contra la voluntad del afectado no pueden ser admitidas como prueba. El Gobierno se remite a diversos procedimientos introducidos en los artículos 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal para garantizar la validez y la transparencia de las investigaciones.

44. Además, el Gobierno hace hincapié en que solo se puede mantener privado de libertad a un sospechoso por el período establecido en la ley y tras un estricto examen judicial, de conformidad con las disposiciones de los artículos 60 y 208 del Código de Procedimiento Penal. El Gobierno también se remite a las disposiciones que garantizan la imparcialidad del procedimiento, incluida la prohibición de la privación de libertad hasta que el sospechoso haya sido informado de las acusaciones que se formulan contra él y se haya obtenido de él una declaración, el derecho de este a solicitar al tribunal que dé a conocer los motivos de la detención en una audiencia pública y su derecho a solicitar la revocación de una orden de detención o a recurrirla (arts. 61, 82, 83, 87, 207 y 429 del Código de Procedimiento Penal)³. De conformidad con el artículo 39, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal, el sospechoso tiene derecho a designar un abogado defensor inmediatamente después de su detención y a reunirse con él sin que nadie más esté presente.

45. El Gobierno observa que la fuente alega que el Sr. Ghosn no compareció ante un juez durante el período abarcado por su detención y privación de libertad, y que no pudo impugnar ante un tribunal su situación jurídica ni la privación de libertad ininterrumpida de que fue objeto. El Gobierno afirma que no está claro el motivo por el que se formularon esas alegaciones, ya que no son compatibles con los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Además, el Gobierno se refiere a la alegación formulada por la fuente de que las autoridades filtraron intencionadamente información sobre el caso a los medios de comunicación, pero afirma que se trata de una especulación y que no se han aportado elementos ni pruebas que la fundamenten. El Gobierno pide al Grupo de Trabajo que examine con detenimiento la credibilidad de la información proporcionada por la fuente.

³ El Gobierno adjuntó extractos de dichas disposiciones. También facilitó extractos de las disposiciones pertinentes de la Ley de Establecimientos Correccionales y Carcelarios y de Trato de Reclusos y Detenidos relativas al trato de las personas no condenadas, el ejercicio físico, las restricciones y las visitas. El Gobierno aclaró que el texto en inglés de esas disposiciones era una traducción oficiosa y pidió al Grupo de Trabajo que se remitiera a la versión original en japonés para mayor exactitud.

46. En definitiva, el Gobierno considera que la legislación del Japón y su aplicación se ajustan a las normas internacionales. En el caso del Sr. Ghosn, el procedimiento seguido no vulneró las normas de derechos humanos aplicables en el Japón.

Comentarios adicionales de la fuente

47. Según la fuente, el Sr. Ghosn decidió abandonar el Japón y viajar al Líbano el 30 de diciembre de 2019, tras llegar a la conclusión de que no tendría un juicio imparcial en el que se garantizara el derecho a la presunción de inocencia.

48. La fuente sostiene que las autoridades japonesas todavía no han respondido a las críticas formuladas a las condiciones particulares de detención a las que fue sometido el Sr. Ghosn y se remite a la afirmación del Gobierno de que le resulta difícil proporcionar información concreta acerca de un caso para el que se ha fijado una vista judicial. No se pidió al Gobierno que formulara observaciones sobre el fondo de un caso en proceso de enjuiciamiento, sino que aclarara si se concedieron al Sr. Ghosn las garantías procesales establecidas en el Pacto en un sistema que la fuente tilda de “justicia de rehenes”. La fuente señala que durante el examen periódico universal más reciente del Japón⁴ y en el examen de sus informes periódicos por el Comité de Derechos Humanos⁵ y el Comité contra la Tortura⁶ ya se trataron vulneraciones de los derechos humanos similares a las denunciadas en el presente caso.

Comentarios adicionales del Gobierno

49. En abril de 2020, el Gobierno del Japón mandó una nueva comunicación al Grupo de Trabajo, en la que informaba de que el Sr. Ghosn había huido del Japón infringiendo las condiciones de su libertad condicional bajo fianza. Por consiguiente, su juicio no puede proseguir. A fin de proteger los derechos de los sospechosos y de quienes cooperan con las investigaciones, la legislación japonesa no permite la publicación de ningún documento relativo a un juicio antes de que se inicie el procedimiento. Por lo tanto, el Gobierno no puede aportar más información sobre el presente caso e insiste en que la Fiscalía actuó con imparcialidad en todas las actuaciones incoadas contra el Sr. Ghosn.

Deliberaciones

50. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno del Japón la información que le han facilitado.

51. Antes de examinar la información recibida, el Grupo de Trabajo desea hacer varias consideraciones preliminares. En primer lugar, el Grupo de Trabajo toma nota de que, tras presentarse la comunicación inicial con arreglo a su procedimiento ordinario, el Sr. Ghosn no ha estado en el Japón porque huyó del país en diciembre de 2019. Este hecho no obsta para que el Grupo de Trabajo emita una opinión, ya que en sus métodos de trabajo no figura ninguna disposición que impida el examen de un caso en tales circunstancias. De hecho, el Grupo de Trabajo considera que es necesario que emita una opinión, ya que las alegaciones relativas a la privación de libertad de que fue objeto el Sr. Ghosn en el Japón son graves y merecen un examen más detenido⁷, y el caso afecta a aspectos importantes del sistema de justicia penal japonés. Además, el Grupo de Trabajo desea examinar elementos del caso que no ha tenido oportunidad de analizar anteriormente, dado que, a pesar de que mantiene un diálogo constante con el Gobierno del Japón, todavía no ha sido invitado a realizar una visita al país.

52. En segundo lugar, el Grupo de Trabajo subraya que, al emitir la presente opinión, no realiza ningún juicio de valor sobre las circunstancias en las que el Sr. Ghosn huyó de la jurisdicción de las autoridades japonesas y no debe interpretarse que disculpa o justifica en modo alguna dicha acción. Al examinar las comunicaciones recibidas en el presente caso, que se refieren a hechos que presuntamente tuvieron lugar antes de que el Sr. Ghosn huyera

⁴ Véase A/HRC/37/15.

⁵ CCPR/C/JPN/CO/6.

⁶ CAT/C/JPN/CO/2.

⁷ Véanse las opiniones núms. 55/2018, párr. 59, y 50/2017, párr. 53 c).

del Japón, el Grupo de Trabajo está cumpliendo su mandato, descrito por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1991/42, de investigar los casos de privación de libertad impuesta de manera arbitraria o incompatible de cualquier otro modo con las normas internacionales pertinentes, mandato que el Consejo de Derechos Humanos prorrogó por última vez en septiembre de 2019 por un período de tres años en su resolución 42/22. El Grupo de Trabajo reconoce que todos los Estados tienen la obligación de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de haber cometido delitos, lo que incluye las acusaciones graves relativas a delitos financieros. No obstante, la opinión del Grupo de Trabajo en el presente caso no se refiere a los cargos que son objeto de actuaciones contra el Sr. Ghosn, sino a las condiciones en las que dichas actuaciones se llevaron a cabo⁸, lo que está en plena conformidad con su mandato.

53. En tercer lugar, el Grupo de Trabajo toma nota de la posición del Gobierno, que este enunció en su respuesta inicial a la comunicación ordinaria y expuso en su comunicación adicional, según la cual el Gobierno no puede proporcionar información sobre el caso del Sr. Ghosn porque la legislación japonesa no permite la publicación de información relativa a un juicio antes de que se inicie el procedimiento. No obstante, tal como el Grupo de Trabajo ya ha afirmado en su jurisprudencia relativa al Japón, no basta con que el Gobierno alegue que su legislación nacional le impide dar una explicación detallada de las acciones de las autoridades nacionales⁹. El Grupo de Trabajo explicó además en su opinión que su creación tenía por objeto atender las necesidades de las víctimas de detención y reclusión arbitrarias en todo el mundo y para que los Estados miembros rindieran cuentas recíprocamente, por lo que no cabía interpretar la intención de los Estados miembros sino en el sentido de que el mecanismo debía solucionar las controversias presentadas por las víctimas. Esa era también la motivación del Consejo de Derechos Humanos cuando recordó a los Estados, en su resolución 33/30, que cooperasen plenamente con el Grupo de Trabajo. Por consiguiente, el Gobierno debe responder normalmente al Grupo de Trabajo en un plazo de 60 días, después de haber realizado las investigaciones apropiadas a fin de proporcionarle la información más completa posible. La afirmación del Gobierno de que su legislación nacional le impedía proporcionar información detallada era incompatible con esa obligación¹⁰.

54. En cuarto lugar, al determinar si la privación de libertad de que fue objeto el Sr. Ghosn fue arbitraria, el Grupo de Trabajo se atiene a los principios establecidos en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. Las meras afirmaciones de que se han seguido los procedimientos legales no son suficientes¹¹. En el presente caso, el Gobierno no ha respondido de manera sustantiva a muchas de las alegaciones formuladas por la fuente, sino que se ha limitado a citar las disposiciones legislativas en las que figuran las garantías de equidad procesal¹². Sin embargo, incluso cuando la privación de libertad se impone de conformidad con la legislación nacional, el Grupo de Trabajo debe examinar si la medida es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos¹³.

55. Por último, antes de examinar si la privación de libertad impuesta al Sr. Ghosn fue arbitraria, cabe considerar otra cuestión preliminar relativa al período real durante el cual el Sr. Ghosn permaneció privado de libertad. Según la fuente, el Sr. Ghosn permaneció en detención policial y en prisión preventiva desde su primera detención, el 19 de noviembre de 2018, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza por primera vez, el 5 de marzo de 2019,

⁸ Opinión núm. 1/2020, párr. 74.

⁹ Opinión núm. 70/2018, párr. 32.

¹⁰ *Ibid.*, párrs. 32 y 33. Véanse también la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 7 y 9, y A/HRC/36/38, párr. 15.

¹¹ A/HRC/19/57, párr. 68.

¹² Véase la opinión núm. 9/2009, párrs. 22 a 24 (en la que el Grupo de Trabajo consideró que este planteamiento no refutaba las alegaciones de la fuente).

¹³ Opiniones núms. 46/2019, párr. 50, 4/2019, párr. 46, y 10/2018, párr. 39.

y permaneció de nuevo en detención policial del 4 al 25 de abril de 2019, fecha en que fue puesto en libertad bajo fianza por segunda vez. En total, los dos períodos suman 128 días¹⁴.

56. No obstante, la fuente también afirma que el Sr. Ghosn estuvo privado de libertad de forma ininterrumpida durante todo el período que se inició con su detención el 19 de noviembre de 2018, lo que incluye los períodos en los que supuestamente fue puesto en libertad bajo fianza, entre el 5 de marzo y el 4 de abril de 2019, y a partir del 25 de abril de 2019. Según la fuente, el Sr. Ghosn estuvo sometido a arresto domiciliario, en particular a partir del 25 de abril de 2019, dada la gravedad de las restricciones que se impusieron a su libertad de circulación y de comunicación. El Gobierno no ha hecho observaciones al respecto.

57. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no impugnó las afirmaciones de que, entre las condiciones de libertad condicional que se impusieron al Sr. Ghosn, figuraban el pago de fianzas muy elevadas, la entrega de sus pasaportes, la prohibición de salir del Japón y de viajar dentro del país durante más de tres días sin autorización judicial previa, la obligación de residir en una dirección aprobada por el tribunal, la prohibición de mantener contacto directo con su esposa, la presencia en su residencia de una cámara de vigilancia que funcionara las 24 horas del día, la prohibición de utilizar teléfonos móviles o computadoras que no fueran los proporcionados por sus abogados y la obligación de presentar todos los meses al tribunal un registro de sus llamadas telefónicas, su historial de búsqueda en Internet y todas las citas que tuviera con personas que no fueran sus abogados.

58. En el presente caso, las condiciones de fianza impuestas al Sr. Ghosn parecen haber sido inusualmente estrictas, en particular la prohibición por un período indeterminado de mantener contacto con su esposa sin autorización judicial previa, salvo a través de sus abogados, que se le impuso durante su segunda libertad condicional¹⁵. Pese a ello, el Grupo de Trabajo discrepa de la afirmación formulada por la fuente de que esas condiciones constituyeron un arresto domiciliario y considera que se trataba de medidas de control policial y judicial.

59. El Grupo de Trabajo examinará a continuación si la privación de libertad que se impuso al Sr. Ghosn en forma de detención policial y prisión preventiva durante 128 días, del 19 de noviembre de 2018 al 5 de marzo de 2019 y del 4 al 25 de abril de 2019, fue arbitraria.

i) Categoría I

60. La fuente alega que el Sr. Ghosn fue detenido en cuatro ocasiones, en vulneración de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, en el que se establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal debe ser llevada sin demora ante un juez. Según la fuente, inicialmente el Sr. Ghosn fue privado de libertad el 19 de noviembre de 2018 y no fue llevado ante un juez hasta el 10 de diciembre de 2018, es decir, al cabo de 23 días¹⁶. Fue privado de libertad una segunda vez del 10 al 20 de diciembre de 2018 sin ser llevado ante un juez, y una tercera durante 23 días, del 21 de diciembre de 2018 al 11 de enero de 2019, antes de comparecer ante un juez y que se formularan acusaciones contra él¹⁷. Finalmente fue privado de libertad por cuarta vez el 4 de abril de 2019 y al cabo de 21 días, el 25 de abril, compareció ante un juez y se formularon acusaciones contra él. El Gobierno no formuló observaciones sobre estas alegaciones, limitándose a afirmar que no eran

¹⁴ La fuente afirma que la privación de libertad duró 129 días, pero el período inicial de detención policial, comprendido entre el 19 de noviembre de 2018 y el 5 de marzo de 2019, asciende a 107 días, no a los 108 calculados por la fuente. Según esta, posteriormente el Sr. Ghosn permaneció privado de libertad durante 21 días más, entre el 4 y el 25 de abril de 2019, lo que suma un total de 128 días de detención policial y prisión preventiva.

¹⁵ En su opinión núm. 55/2018, el Grupo de Trabajo examinó una restricción similar sobre el contacto con la esposa y señaló que era inusual.

¹⁶ El período comprendido entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2018 ascendió a 22 días.

¹⁷ El Sr. Ghosn compareció brevemente ante un tribunal el 8 de enero de 2019 para reclamar aclaraciones sobre los motivos de su privación de libertad. Parece ser que este, y no el 11 de enero de 2019, fue el primer momento en que se revisó la privación de libertad del Sr. Ghosn tras su tercera detención. Por lo tanto, el período transcurrido sin que hubiera una revisión judicial fue de 19 días.

compatibles con los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal del Japón.

61. Tal como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, 48 horas son normalmente suficientes para satisfacer el requisito establecido en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto de llevar a la persona “sin demora” ante un juez tras su detención, y todo plazo superior deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas¹⁸. La finalidad de dicho requisito es garantizar que una autoridad judicial pueda revisar si la detención tiene fundamento jurídico y, de no ser así, ordenar la puesta en libertad de la persona¹⁹.

62. El Grupo de Trabajo considera que el requisito establecido en el artículo 9, párrafo 3, de llevar a la persona sin demora ante un tribunal debía aplicarse a cada una de las cuatro detenciones del Sr. Ghosn. La primera de ellas fue la primera vez en que el Sr. Ghosn era objeto de privación de libertad y debería haber sido llevado sin demora ante un tribunal. La segunda y tercera detenciones se llevaron a cabo al finalizar sendos períodos de detención policial. Según la fuente, tenían por objeto eludir el plazo máximo de 23 días de detención policial a fin de que las autoridades pudieran seguir manteniendo al Sr. Ghosn privado de libertad. La tercera detención se llevó a cabo pese a haberse dictado el día anterior una orden de puesta en libertad del Sr. Ghosn. Por este motivo, las detenciones policiales impuestas tras la segunda y tercera detenciones suscitaban serias dudas en cuanto a su legalidad, por lo que, a fin de que fueran sometidas a examen, el Sr. Ghosn debería haber comparecido sin demora ante un tribunal²⁰. Además, la cuarta detención se produjo tras un período de libertad bajo fianza y volvía a estar sujeta al requisito establecido en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

63. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que, tras sus sucesivas detenciones, el Sr. Ghosn fue privado de libertad por períodos de 22, 10, 19 y 21 días, respectivamente, sin ser llevado ante un juez, lo que constituye una vulneración del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

64. De forma similar, la fuente alega, sin que el Gobierno lo haya refutado, que durante esos cuatro períodos en los que se le impuso privación de libertad, el Sr. Ghosn no pudo impugnar dicha medida ante un tribunal. Según la fuente, la legislación japonesa establece que una persona puede permanecer privada de libertad un máximo de 23 días sin que se formulen acusaciones contra ella y no puede solicitar su puesta en libertad hasta que esas acusaciones se hayan en efecto formulado. Así pues, el Sr. Ghosn no pudo recurrir a los tribunales hasta que se hubieron presentado cargos contra él. Entonces presentó dos solicitudes de puesta en libertad, el 11 y el 18 de enero de 2019. Como ya ha señalado el Grupo de Trabajo, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la legalidad de la privación de libertad procede desde el momento de la detención como garantía esencial para que el fundamento jurídico de dicha privación de libertad sea objeto de revisión judicial desde su inicio²¹. La demora con que se concedió este derecho al Sr. Ghosn constituyó una vulneración del artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

65. La fuente sostiene además que, cuando el caso del Sr. Ghosn fue llevado ante los tribunales, los jueces no ejercieron ningún control real sobre su privación de libertad. Afirma que los tribunales aprobaron dicha medida sin realizar un examen exhaustivo, lo que es habitual en un sistema de justicia penal en el que los jueces aceptan de forma rutinaria las solicitudes de privación de libertad presentadas por la Fiscalía. En el marco del examen de la privación de libertad del Sr. Ghosn, los tribunales deberían haber considerado la posibilidad de imponer medidas alternativas a la prisión preventiva mucho antes del 5 de marzo de 2019, fecha en que el Sr. Ghosn fue puesto en libertad bajo fianza por primera vez.

¹⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 33.

¹⁹ Opiniones núms. 15/2020, párr. 56, y 70/2019, párr. 62. Véanse los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37), párr. 3.

²⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 32. La situación del Sr. Ghosn puede contrastarse con el caso descrito por el Comité de Derechos Humanos en *Everton Morrison c. Jamaica*, comunicación núm. 635/1995, en el que el acusado ya estaba legalmente privado de libertad por una primera acusación y no tenía derecho a ser puesto en libertad por una segunda.

²¹ A/HRC/30/37, principio 8 y directriz 7.

66. El Grupo de Trabajo recuerda que es una norma bien establecida del derecho internacional que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, y que debe ser impuesta por el período más breve posible²². El artículo 9, párrafo 3, del Pacto dispone que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. De ahí que la libertad se reconozca como principio, y su privación, como excepción en aras de la justicia²³.

67. Para aplicar este principio, la reclusión previa al juicio debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito²⁴. Los tribunales deben examinar si la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad, como la libertad bajo fianza, haría innecesarias las medidas privativas de la libertad²⁵. Según la fuente, los tribunales rechazaron el 15 y el 22 de enero de 2019, respectivamente, dos solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por el Sr. Ghosn, y la tercera, presentada el 28 de febrero de 2019, dio lugar a su puesta en libertad el 5 de marzo de ese mismo año. El Gobierno no ha explicado las razones por las que se denegó la libertad bajo fianza en esas ocasiones. A falta de tal explicación, el Grupo de Trabajo no puede aceptar el argumento de que la prisión preventiva de que fue objeto el Sr. Ghosn se impuso de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Además, dado que las personas privadas de libertad no pueden solicitar la libertad bajo fianza hasta que se presenten acusaciones en su contra, los tribunales no pudieron atenerse a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, y considerar la posibilidad de imponer medidas alternativas a la privación de libertad antes de que se presentaran cargos contra el Sr. Ghosn. El Grupo de Trabajo se suma a los llamamientos que abogan por la abolición del sistema *daiyo kangoku* o a que este se ajuste a lo dispuesto en el Pacto, garantizando que se considere debidamente la posibilidad de imponer medidas alternativas a la privación de libertad antes de que se formulen las acusaciones²⁶.

68. Por último, el Grupo de Trabajo toma nota del hecho de que las autoridades sometieron al Sr. Ghosn a una serie de detenciones sucesivas desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019. A falta de una explicación del Gobierno que justifique la necesidad de llevar a cabo esas detenciones sucesivas, el Grupo de Trabajo considera que esta pauta reiterativa fue un abuso procesal extrajudicial (cuestión que se examina más adelante, en el marco de la categoría III) que no puede gozar de fundamento jurídico en el derecho internacional²⁷.

69. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que las autoridades no establecieron el fundamento jurídico que podía justificar la privación de libertad del Sr. Ghosn. Por consiguiente, dicha privación de libertad fue arbitraria y se inscribe en la categoría I.

ii) Categoría III

70. La fuente alega que la privación de libertad del Sr. Ghosn fue el resultado del uso de métodos arbitrarios por parte de la Fiscalía para eludir el plazo máximo de 23 días de detención policial. Según la fuente, la Fiscalía dividió artificialmente el delito de ocultación de ingresos en dos períodos distintos (de 2010 a 2014 y de 2015 a 2017), lo que dio lugar a la primera y segunda detenciones y permitió la imposición de dos períodos de detención policial de 23 días cada uno. Además, las autoridades detuvieron al Sr. Ghosn una tercera vez, el 21 de diciembre de 2018, por hechos ocurridos diez años atrás que el fiscal ya había examinado y por los que en ningún momento había decidido incoar actuaciones. Esa tercera detención se llevó a cabo pese a haberse dictado el 20 de diciembre de 2018 una orden de

²² Véanse las opiniones núms. 8/2020, párr. 54, 1/2020, párr. 53, 57/2014, párr. 26, 49/2014, párr. 23, y 28/2014, párr. 43. Véase también la observación general núm. 35 del Comité de Derechos Humanos, párr. 38, y A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58.

²³ A/HRC/19/57, párr. 54.

²⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 38.

²⁵ *Ibid.* Véanse la opinión núm. 83/2019, párr. 68, y A/HRC/30/37, directriz núm. 15.

²⁶ Véanse A/HRC/37/15, párr. 161, recomendaciones 135 a 137; CCPR/C/JPN/CO/6, párr. 18; CAT/C/JPN/CO/2, párr. 10, y la opinión núm. 55/2018, párr. 78.

²⁷ Véase también la opinión núm. 37/2018, párr. 32.

puesta en libertad del Sr. Ghosn. Por último, el Sr. Ghosn fue detenido una cuarta vez el 4 de abril de 2019 por hechos que la Fiscalía conocía desde hacía mucho tiempo.

71. En su respuesta, el Gobierno afirma que, de conformidad con los artículos 60 y 208 del Código de Procedimiento Penal, solo se puede mantener privado de libertad a un sospechoso por el período establecido en la ley y tras un estricto examen judicial. También se refiere a otras garantías previstas en el Código de Procedimiento Penal, como la prohibición de la privación de libertad hasta que el sospechoso haya sido informado de las acusaciones que se formulan contra él, el derecho de este a solicitar al tribunal que dé a conocer los motivos de la detención y el derecho a solicitar la revocación de una orden de detención. Si bien estas garantías son importantes, la respuesta del Gobierno no ha refutado directamente las alegaciones formuladas por la fuente.

72. A falta de otras explicaciones por parte del Gobierno, las sucesivas detenciones del Sr. Ghosn parecen un abuso procesal destinado a prolongar su privación de libertad. Según la fuente, las autoridades judiciales llegaron a una conclusión similar el 20 de diciembre de 2018, cuando decidieron rechazar una solicitud para prorrogar diez días más la detención policial del Sr. Ghosn. Pese a esa decisión, el Sr. Ghosn fue detenido por tercera vez al día siguiente. El Grupo de Trabajo concluye que el proceso de detención y reclusión de que fue objeto el Sr. Ghosn en cuatro ocasiones fue fundamentalmente injusto, ya que le impidió recuperar su libertad y disfrutar de otros derechos propios de un juicio imparcial, como el de comunicarse libremente con un abogado, lo que se examina más adelante. Teniendo en cuenta la presunta conducta injusta de los fiscales, el Grupo de Trabajo remitirá el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

73. Además, la fuente alega que el Sr. Ghosn fue recluso en el marco de una pauta sistemática de privación de libertad, denominada “justicia de rehenes”, por la que los sospechosos permanecen reclusos durante largos períodos en condiciones duras, con lo que se ejerce presión psicológica sobre ellos para que confiesen. La fuente sostiene que las condiciones en las que el Sr. Ghosn fue privado de libertad, entre las que figuraban la reclusión en régimen de aislamiento, la privación de ejercicio, la presencia permanente de luz y la ausencia de calefacción, así como la limitación del contacto con su familia y su abogado²⁸, contravinieron el artículo 10, párrafo 1, del Pacto y mermaron la capacidad del Sr. Ghosn para defenderse con eficacia. A consecuencia de ello, el Sr. Ghosn firmó documentos en japonés en los que se describían los hechos relativos a las acusaciones formuladas en su contra. Según la fuente, el Sr. Ghosn solo pudo disponer de una traducción simultánea oral de los documentos y los firmó sin que sus abogados estuvieran presentes.

74. En su respuesta, el Gobierno se remite al artículo 38 de la Constitución del Japón y el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal, en los que se prohíbe admitir como prueba las confesiones obtenidas contra la voluntad del afectado y dictar una sentencia condenatoria si la única prueba incriminatoria es una confesión. Según el Gobierno, los fiscales nunca se basan exclusivamente en confesiones y solo inician actuaciones penales cuando consideran que hay una probabilidad elevada de que se dicte una sentencia condenatoria sobre la base de pruebas legítimas. El Gobierno también cita una serie de disposiciones de la Ley de Establecimientos Correccionales y Carcelarios y de Trato de Reclusos y Detenidos relativas al trato de las personas no condenadas, el ejercicio físico, las restricciones y las visitas.

75. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha aportado indicios razonables de que el Sr. Ghosn fue privado de libertad en circunstancias en las que fue obligado de hecho a prestar declaraciones en relación con las acusaciones que se formulaban contra él, lo que vulneró sus derechos a la presunción de inocencia, garantizado en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto, y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, amparado por el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto. Recae sobre el Gobierno la carga de demostrar que las declaraciones del acusado fueron prestadas por propia voluntad, sin que las autoridades

²⁸ Véanse las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), reglas 13, 22, 23, 43 a 45, 58 y 61, y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principios 15 y 17 a 19.

investigadoras ejercieran sobre él presión física o psíquica directa o indirecta alguna²⁹, lo que el Gobierno no ha hecho.

76. Al llegar a esta conclusión, el Grupo de Trabajo observa que otros mecanismos de derechos humanos han reconocido que las prácticas de interrogatorio y privación de libertad del sistema *daiyo kangoku*, que se basa en gran medida en las confesiones, pueden limitar gravemente el derecho a un juicio imparcial y exponer a las personas privadas de libertad a tortura, malos tratos y coacción³⁰. En efecto, el Grupo de Trabajo ya ha expresado con anterioridad inquietudes similares, y ha señalado que un exceso de discrecionalidad fiscalizadora sin una supervisión judicial adecuada puede generar un entorno propicio a la aplicación discriminatoria de la ley³¹. El Grupo de Trabajo remitirá el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

77. La fuente alega también que la Fiscalía sometió al Sr. Ghosn a interrogatorios diarios, en ocasiones varias veces al día, con una duración media de cinco horas, sin la presencia de su abogado. Los fiscales pudieron entrevistar al Sr. Ghosn en cualquier momento del día, incluso en horarios en los que sus abogados no podían acceder al centro de detención. Solo se permitió al Sr. Ghosn hablar con sus abogados extranjeros durante un máximo de 30 minutos y sin ninguna confidencialidad, ya que las entrevistas se realizaron en presencia de guardias que tomaban notas de sus conversaciones. También se denegó al Sr. Ghosn el acceso a los alegatos, por lo que tuvo que reconstruir la investigación de los fiscales a partir de las preguntas que se le formularon durante los interrogatorios. En su respuesta, el Gobierno se remitió al artículo 39, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece el derecho del sospechoso a designar un abogado defensor inmediatamente tras su detención y a reunirse con él sin que nadie más esté presente³². El Gobierno no explicó de qué modo se aplicó esa disposición en el presente caso.

78. Las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección en cualquier momento de su privación de libertad, en particular inmediatamente después de la detención, lo que debe facilitárseles sin demora³³. El Grupo de Trabajo considera que el hecho de que no se facilitara al Sr. Ghosn el acceso a sus abogados desde el inicio de la privación de libertad y de que posteriormente se limitara la duración de sus entrevistas con sus abogados japoneses y extranjeros vulneró su derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un abogado de su elección, reconocido en el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto. Las comunicaciones con el abogado se pueden celebrar a la vista de las autoridades a condición de que estas no puedan oírlos, y deben ser confidenciales³⁴. El hecho de no facilitar el acceso igualitario a los alegatos también vulneró el principio de igualdad de medios procesales³⁵. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que garantice que los acusados de delitos penales tengan acceso a un abogado desde el inicio de su privación de libertad y durante los interrogatorios.

79. Por último, la fuente afirma que cuando fue detenido, el 19 de noviembre de 2018, el Sr. Ghosn fue presentado como culpable, ya que los medios habían sido informados previamente de la detención. Según la fuente, cuando el Sr. Ghosn fue detenido por cuarta vez el 4 de abril de 2019, el fiscal se presentó acompañado de periodistas y fotógrafos, que

²⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 41. Véanse también las opiniones núms. 15/2020, párr. 76, y 5/2020, párr. 83.

³⁰ Véanse CCPR/C/JPN/CO/6, párr. 18, y CAT/C/JPN/CO/2, párrs. 10 y 11.

³¹ Véase la opinión núm. 55/2018, párr. 78, en la que el Grupo de Trabajo también citó la opinión núm. 42/2006, párrs. 13 a 16.

³² El Gobierno cita el artículo 198, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal, en el que no se prevé la presencia del abogado del sospechoso durante los interrogatorios.

³³ A/HRC/30/37, principio 9 y directriz 8; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 35.

³⁴ Reglas Nelson Mandela, regla 61, párr. 1; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 18, y A/HRC/30/37, directriz 8.

³⁵ Opinión núm. 70/2019, párr. 79, y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 33.

grabaron imágenes de la detención y las difundieron ampliamente. Estos elementos contribuyeron a forjar una imagen pública negativa del Sr. Ghosn. Además, cuando este compareció ante el Tribunal de Distrito de Tokio el 8 de enero de 2019, estaba esposado y atado a la cintura con una cuerda.

80. En su respuesta, el Gobierno afirma que la alegación de que se filtró intencionadamente información del caso a los medios de comunicación es infundada. También se remite al artículo 78 de la Ley de Establecimientos Correccionales y Carcelarios y de Trato de Reclusos y Detenidos, en el que se contempla el uso de medios de inmovilización cuando los funcionarios de prisiones escoltan a los reclusos o cuando existe un riesgo elevado de fuga, autolesión, lesiones a terceros o daños materiales.

81. El Grupo de Trabajo recuerda que todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio y que los medios de comunicación deben evitar difundir las noticias de tal modo que se vea socavada la presunción de inocencia³⁶. Dada la amplia difusión que se dio a las imágenes de las detenciones del Sr. Ghosn, es probable que los medios fueran informados previamente de que estas se iban a producir. El Grupo de Trabajo no puede excluir la posibilidad de que, teniendo en cuenta la notoriedad del caso, esa difusión contribuyera a transmitir a la opinión pública una imagen negativa del Sr. Ghosn, lo que vulneró el derecho a la presunción de inocencia que lo ampara en virtud del artículo 14, párrafo 2, del Pacto. Además, a falta de una explicación del Gobierno que justifique la necesidad de utilizar medios de inmovilización durante la comparecencia del Sr. Ghosn ante el tribunal, el Grupo de Trabajo considera que el uso de esposas y de una cuerda atada a la cintura constituyeron otra vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Los acusados no deben ser presentados ante el tribunal de tal manera que se dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos, ya que ello socava la presunción de inocencia³⁷.

82. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que las vulneraciones del derecho a un juicio imparcial fueron de tal gravedad que confieren a la privación de libertad del Sr. Ghosn un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

83. Al Grupo de Trabajo le complacería tener la oportunidad de trabajar de manera constructiva con el Gobierno del Japón a fin de abordar sus graves preocupaciones relativas a la privación arbitraria de la libertad. El 30 de noviembre de 2016 el Grupo de Trabajo remitió al Gobierno una solicitud para realizar una visita al país y celebra la implicación de este en las reuniones que el Grupo de Trabajo ha celebrado con la Misión Permanente del Japón ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para examinar la posibilidad de realizar dicha visita. El 2 de febrero de 2018 el Grupo de Trabajo mandó una nueva solicitud al Gobierno para realizar una visita al país y espera recibir de este una respuesta afirmativa como muestra de su disposición a intensificar su cooperación con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Decisión

84. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Carlos Ghosn, que tuvo lugar del 19 de noviembre de 2018 al 5 de marzo de 2019 y del 4 al 25 de abril de 2019, es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 10, párrafo 1, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

85. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Japón que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Ghosn sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

³⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, Párr.30.

³⁷ *Ibid.* Véanse también las opiniones núms. 83/2019, párr. 73, 36/2018, párr. 55, 79/2017, párr. 62, 40/2016, párr. 41, y 5/2010, párr. 30.

86. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder al Sr. Ghosn el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

87. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la detención arbitraria del Sr. Ghosn y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

88. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para que tomen las medidas correspondientes.

89. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

90. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Ghosn;
- b) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Ghosn y, de ser así, el resultado de la investigación;
- c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas del Japón con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- d) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

91. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

92. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, sobre las deficiencias observadas.

93. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado³⁸.

[Aprobada el 28 de agosto de 2020]

³⁸ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.

Annex

Partially dissenting opinion of Sètondji Roland Adjovi

1. The mandate of the Working Group deals with arbitrary detention and sets a prerequisite: the situation submitted for its consideration must constitute one of detention. However, the Working Group seems to be regressing in this interpretation, which undermines the protection enshrined in international instruments.
 2. Indeed, the source asserts that the period during which Mr. Ghosn was released on bail should also be taken into account, whereas the majority of the Working Group concludes otherwise.
 3. In my view, detention within the meaning of the Working Group's mandate was never conceived in a strict sense but rather as a restriction of the freedom of movement that the individual naturally enjoys. Indeed, in the texts relating to the Working Group, both detention and deprivation of liberty, a broader concept, are referred to. In other words, and in principle, deprivation of liberty or detention is a *de facto* situation arising from restrictions on the enjoyment of the freedom of movement. This definition will be all the more important where the restrictions are part of a criminal law framework, as in the present case, in order to ensure judicial review of the deprivation of liberty as required in a State governed by the rule of law.
 4. The Working Group, in its jurisprudence, had considered that house arrest could constitute detention under certain conditions. I am convinced that any restriction on freedom of movement of the individual constitutes a deprivation of liberty. However, the conditions for such a restriction to be arbitrary would necessarily be different from a situation of confinement in a place controlled by the State. It remains essential that such a restriction is provided for by law and therefore has a legal basis. The restriction must be justified in every respect. And the restriction must not be based on discrimination in violation of the principle of equality before the law.
 5. In the present case, in my view, the Working Group should have recognized that the release on bail constituted a situation of restriction of liberty and thus a deprivation of liberty which was within its mandate. In its opinion, the Working Group clearly notes that the conditions of this situation are extraordinary, but it does not take them into account because of its position rejecting that it constitutes detention. And that is why I am issuing this partially dissenting opinion. In my view, the situation does indeed constitute a deprivation of liberty which falls within the mandate of the Working Group and the conditions imposed should have been assessed to determine whether they are such that the situation has become arbitrary.
 6. The Working Group has missed another opportunity to consolidate the protection of the individual from the monopoly of legal violence that the State is trying to exercise over him. Today, with a State policy focused on security risks, particularly terrorism, the State is arrogating more and more rights to itself, by derogating from the principles that protect us, and it is the very role of human rights institutions to stay the course to frame these developments in order to ensure continued protection of the individual. The Working Group, by refraining from considering any restriction of liberty as a deprivation of liberty, misses its fundamental mission and runs the risk of allowing situations where the State is resourceful to slip through the cracks. I regret to have to disagree in these circumstances, even though my voice is still in a minority.
-